

# Colombia

Boletín Informativo Trimestral de Peace Brigades International Colombia

No. 2 Febrero 2007

## El destierro forzado y las violaciones contra las mujeres

## Operación Génesis: Diez años después

ISSN: 1909-3489



# SUMARIO

◆ El destierro forzado y las violaciones contra las mujeres .....	3
◆ Ascenso en los hostigamientos y amenazas contra defensores .....	4
◆ El Día de los Derechos Humanos no pasó desapercibido en Bogotá .....	4
◆ Reconocida en Alemania la “incansable e intrépida” labor de Anita, de Cavida .....	5
◆ Operación Génesis: Diez años después .....	6
◆ TPP juzga a las transnacionales mineras .....	7
◆ “Un total irrespeto a las víctimas” .....	7
◆ Se desvela en Colombia la ‘para’política .....	8

## PEACE BRIGADES INTERNATIONAL PBI COLOMBIA

◆ CALCP: bienvenida a una nueva organización acompañada .....	9
◆ Barrancabermeja: Motilón Bari reivindica su tierra .....	10
◆ Bogotá: Investigación del paramilitarismo en Sucre .....	11
◆ Medellín: Víctimas quieren escuchar confesiones de Mancuso .....	11
◆ Urabá: Un día en la zona humanitaria El Tesoro .....	12

## INTERNACIONAL

◆ Celebración del 25o aniversario de PBI en España .....	13
◆ Misiones de la UE llamadas a consultar con la comunidad de DDHH .....	13
◆ Comunidad de Paz de San José se expresa en Washington .....	14

## PERSONAL

◆ Hora de decir adiós .....	15
-----------------------------	----

### FINANCIADORES PBI COLOMBIA

Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) (a través de PBI Cataluña)  
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) (a través de PBI Estado Español)  
Amnistía Internacional  
Appletree Foundation (a través de PBI Reino Unido)  
Ayuntamiento de Palencia (a través de Sodepaz)  
Ayuntamiento de Vitoria (a través de PBI Vitoria Gasteiz)  
Broederlijk Delen  
Cafod  
Canadian Autoworkers (a través de PBI Canadá)  
Canadian International Development Agency (CIDA) (a través de PBI Canadá)  
Central Missie Commissariat (CMC)  
Christian Aid  
Diakonia Suecia  
Diakonisches Werk  
Fons Mallorquí

Gobierno de Cantabria (a través de PBI Estado Español)  
Gobierno de Navarra (a través de Mugarik Gabe)  
Internóm-Oxfam  
Kerkinactie  
Law Society (a través de PBI Reino Unido)  
Lonely Planet  
Ministerio de Asuntos Exteriores, Francia (a través de PBI Francia)  
Ministerio de Asuntos Exteriores, Noruega (a través de PBI Noruega)  
Ministerio de Asuntos Exteriores, Suiza (a través de PBI Suiza)  
Misereor  
Project Counselling Service (Heks)  
Rausing Trust (a través de PBI Reino Unido)  
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)  
(a través de PBI Alemania)  
Trocaire



Según *Human Rights Watch*<sup>1</sup>, “la población civil es la más afectada por el conflicto. Cada año miles son desplazados por la violencia, perdiendo sus hogares y sus medios de sustento. Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos selectivos, las amenazas y los secuestros continúan siendo habituales. La gran mayoría de abusos nunca se conocen públicamente”. A continuación reseñamos dos informes: el primero de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)<sup>2</sup>, atacando el problema de destierro forzado; el segundo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)<sup>3</sup>, subrayando la grave situación de las mujeres frente al conflicto armado.

## El desplazamiento forzado: una estrategia de apropiación de las tierras de otros

Según el informe de la CCJ, “el desplazamiento forzado ha sido utilizado en muchos casos como método para afianzar el monopolio sobre la propiedad agraria, por medio de la violencia y de trampas jurídicas ejercidas en su mayoría por grupos paramilitares, con el apoyo o la omisión de la Fuerza Pública y con el concurso de las autoridades locales y nacionales. (...) Hoy en día, algunas de las más importantes directrices gubernamentales apoyan la legalización a gran escala de la usurpación realizada por los grupos paramilitares”. Para esta organización las propuestas del Gobierno para la desmovilización de los grupos paramilitares tienen este propósito, y subrayan que el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, ha expresado claramente este propósito: “los programas de proyectos productivos para la paz”, destinados a los paramilitares “reinsertados”, tienen como objetivo “acabar con la improductividad rural que se estaba viviendo en varias regiones del país por la presencia de grupos ilegales”, “convirtiéndolos (a los paramilitares) en propietarios e integrándolos a empresas viables”<sup>4</sup>.

Frente a este fenómeno, “en varias partes de Colombia, comunidades de personas desplazadas o en riesgo de desplazamiento forzado, campesinas y campesinos, comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas se oponen a esta política y están exigiendo, mediante acciones legales y de resistencia civil, sus derechos a la vida digna, a la restitución de sus territorios y al retorno a dichos territorios en condiciones de seguridad y dignidad. Sin embargo, estas iniciativas han sido desatendidas o señaladas por el Gobierno como contrarias a la paz.”



*Campesino en el asentamiento de desplazados. La Honda, Medellín*

## Las mujeres víctimas pero también portadoras de esperanzas



*Indígena Embera © Jorge Mata/Surimages*

Por medio de su informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “comunica y reitera su grave preocupación por el sufrimiento que viven las mujeres colombianas a causa de la violencia y discriminación agravada por el conflicto armado”. De igual forma destaca “el extraordinario esfuerzo de las mujeres colombianas para enfrentar la adversidad del conflicto armado interno” y que “no sólo son víctimas de una discriminación y violencia estructural, exacerbada por el conflicto armado interno, son también portadoras de iniciativas de inclusión, democratización y pacificación auténtica de la sociedad y del Estado colombiano.”

En numerosas ocasiones los derechos de las mujeres son menoscabados en el contexto del conflicto armado por el simple hecho de ser mujeres. La violencia contra la mujer es utilizada como estrategia de guerra por los actores del conflicto armado, en su lucha por controlar territorios y las comunidades. La relatora de la Comisión identificó cuatro principales manifestaciones de violencia que afectan especialmente a las mujeres. “En primer término, los actores del conflicto armado emplean distintas formas de violencia física, psicológica y sexual (...) ya sea deshumanizan-

do a la víctima, vulnerando su núcleo familiar y/o impartiendo terror en su comunidad (...) En esta clase de violencia, las mujeres pueden ser blanco directo o víctimas colaterales (...). En segundo término, la violencia destinada a causar el desplazamiento forzado del territorio y el consecuente desarraigo de su hogar, vida cotidiana, comunidad y familia. En tercer término, la violencia sexual que puede acompañar el reclutamiento forzado de las mujeres, destinado a hacerlas rendir servicios sexuales (...). En cuarto término, la violencia destinada a hacerlas objeto constante de pautas de control social impuestas por grupos armados ilegales (...)”. La situación de las mujeres indígenas y afrocolombianas es crítica al ser víctimas de múltiples formas de discriminación por causa de su raza, etnia y por el hecho de ser mujeres.

1. Human Right Watch, ‘World Report 2007’.
2. Comisión Colombia de Jurista, “Revertir el destierro forzado: protección y restitución de los territorios usurpados - Obstáculos y desafíos para garantizar el derecho al patrimonio de la población desplazada en Colombia”, 2006
3. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia”, octubre 2006
4. Alto Comisionado para la Paz, comunicado de prensa, “El Gobierno adjudicará 700 hectáreas de tierra a desmovilizados”, 28 de septiembre de 2006, en [www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2006](http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2006).

## Ascenso en los hostigamientos y amenazas contra los defensores

**D**urante los últimos meses de 2006 los miembros de PBI Colombia observaron un claro ascenso en los hostigamientos y amenazas contra los defensores de derechos humanos y comunidades acompañadas en varias regiones del país.



En la región de Urabá, residentes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó expresaron en un comunicado público<sup>1</sup> su preocupación por la presencia de un grupo de 30 o 40 hombres armados con pañoletas de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) en una casa cercana a San Josecito. El presunto grupo paramilitar preguntó por nombres de líderes locales y declaró que su principal misión era exterminar la Comunidad de Paz, acusándoles de guerrilleros e indicando que la presencia de los “gringos” representaba el único freno para la ejecución de su tarea.

Asimismo, en la región del Chocó, Enrique Petro y los pobladores de la zona humanitaria de Curbaradó, también vivenciaron un aumento en las hostilidades en la región. PBI está presente en el proceso de creación de esta zona desde abril de 2006, acompañando a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) en su apoyo a los campesinos para la construcción de la zona en la propiedad de don Petro. Hasta abril, sus tierras se encontraban dominadas por el cultivo ilegal de palma africana. Sin embargo, la persistencia de los campesinos ha permitido la gestación de la zona humanitaria en un pedazo de tierra. Ahora bien, lejos de lograr el respeto por sus derechos, la comunidad no consigue vivir en paz. CIJP denunció<sup>2</sup> en octubre una conversación entre varios trabajadores de palma que indicaba que a don Petro había que “sacarle a las buenas o a las malas”. Este señalamiento ocurrió un mes después que el campesino recibiera otra intimidación que decía que “en ese momento no era posible tocar a Enrique Petro porque andaba con unos gringos pero que se le va a tocar lo que más le duele, su familia”<sup>3</sup>. A estas amenazas se suman las informaciones en la región de un presunto grupo paramilitar identificado como “Águilas Negras”<sup>4</sup>.

Por otro lado, en Bogotá, en noviembre, hombres portando armas largas detuvieron el vehículo asignado por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a Iván Cepeda y Claudia Girón, miembros de la Fundación Manuel Cepeda. Ninguno se encontraba en el carro, pero

los hombres prosiguieron a buscar otros pasajeros, presentándose al conductor y escolta del DAS como agentes del cuerpo de inteligencia de la Policía. Posteriormente este organismo de control expresó que no tuvieron operativos en el lugar y hora del incidente.

En el Valle del Cauca salió a la luz un presunto montaje judicial a trece líderes sociales, sindicalistas, y defensores de derechos humanos, sindicados de rebelión y terrorismo. La lista incluía el nombre de Benenice Celeyta, presidente de NOMADESC y acompañada por PBI y mencionaba a Marta Ascuntar y Fernando Sánchez, coordinadores de la seccional de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en el **Valle del Cauca**. Ambos se vieron obligados a abandonar temporalmente el país después de que sus nombres aparecieron en esta misiva<sup>5</sup>.

Todos estos hostigamientos están repercutiendo negativamente al trabajo de los defensores de derechos humanos desarrollan en Colombia. Hasta el momento, los organismos responsables no han ofrecido un esclarecimiento de las investigaciones de estas amenazas.

<sup>1</sup> “Las amenazas persisten”, Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 26 de septiembre de 2006

<sup>2</sup> “Nuevos planes de actuación contra Enrique Petro y Zonas Humanitarias”, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 23 de octubre de 2006

<sup>3</sup> Informe 75, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 22 de septiembre de 2006

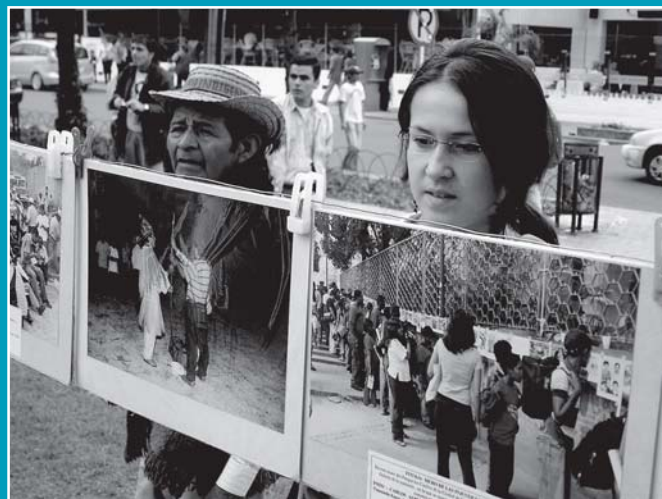
<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> “Planean detención masiva contra destacados dirigentes del Valle del Cauca”, Acción Urgente publicado por FCS-PP, NOMADESC, SINTRAEMCALI entre otros, 2 de octubre del 2006

## El Día Internacional de DDHH no pasó desapercibido en Bogotá

**E**n el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la organización Rayuela convocó a 4000 mujeres de todo el país para construir un monumento por la paz. Miles de mujeres vestidas de luto se sentaron desde la Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad, hasta el parque de la 93, sobre las carreras 7 y 15.

Con consignas que pedían justicia y verdad, las mujeres caminaron a lo largo de estas vías para recordar a los que han sido asesinados, desaparecidos y secuestrados durante el conflicto armado. En el recorrido había carpas de distintas organizaciones como el Movimiento de Víctimas, Hijos e Hijas por la Memoria contra la Impunidad y familiares de las víctimas de la Unión Patriótica, que informaban a los pasantes sobre los asesinatos y masacres que han tenido lugar durante los años del conflicto colombiano. Esa mañana de 10 de diciembre atrajo la atención de las miles de personas que cada domingo pasean por la ciclovía. Muchos fueron los que se acercaron para leer los nombres de las personas muertas escritos sobre los ladrillos a lo largo de las carreras y que preguntaban el porqué del evento. Quizá, al inicio, la mayoría de las personas que estuvieron ahí no tenían conocimiento de que se celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, gracias a esta iniciativa de la sociedad civil finalmente este día no pasó desapercibido.





## Comunidades en resistencia

# Reconocida en Alemania la “Incansable e intrépida labor” de Anita de CAVIDA

La ciudad alemana de Bremen reconoció el trabajo de dos mujeres colombianas acompañadas por PBI, Ana del Carmen Martínez, de CAVIDA y Carolina Pardo Jaramillo, de Justicia y Paz, al entregarlas el Premio Solidaridad el pasado diciembre. El jurado destacó que ambas mujeres se distinguen por su “incansable e intrépida labor” en favor de la Zona Humanitaria en la región fronteriza con Panamá, en la que siempre han estado expuestas a amenazas y persecuciones por parte de actores armados.

Anita, como Ana del Carmen es cariñosamente llamada en la comunidad, habló con PBI en su retorno a la zona humanitaria “Nueva Vida” sobre la importancia del premio para CAVIDA.

### ¿Qué significa recibir el premio de solidaridad de Bremen?

¡Fue muy importante! El cordón humano - la red de apoyo de CAVIDA- es muy grande y para nosotros es importante tener este apoyo internacional. Las personas de otros países nos valoran más que dentro de Colombia, donde nos desplazaron, nos asesinaron, nos desarraigaron. ¿El Gobierno colombiano qué ha hecho? Nada, sólo nos judicializa y con los órganos militares y paramilitares nos quitan la tierra. Los Gobiernos de la Unión Europea nos apoyan, y eso nos da la fuerza de seguir resistiendo. El premio representa el respaldo internacional para nuestro proyecto y un reconocimiento público de los hechos para que la verdad no se quede en la oscuridad y la verdad sea dicha.

### ¿Quién y cómo seleccionaron a CAVIDA para el premio?

Pan Para el Mundo propuso a Carolina Pardo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y a mí para CAVIDA. El año pasado nos llegó una invitación para Sudáfrica por Misereor. Fui solita representando a la comunidad, y lo que compartí impactó mucho a la personas presentes que se enteraron de nuestra historia y llamó la atención del comité de selección en Bremen.

### ¿Cuál fue tu mejor momento en Alemania?

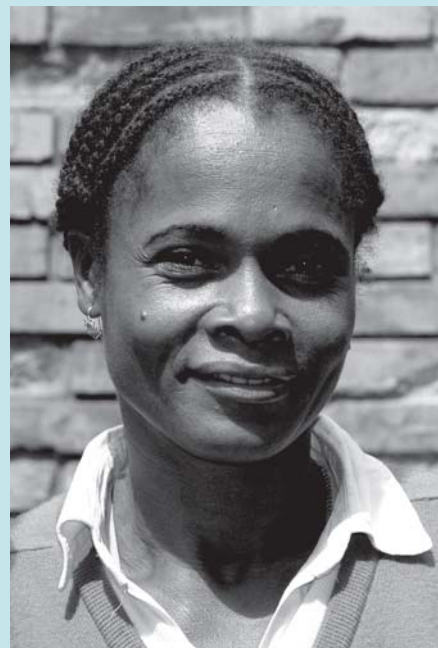
¡Cuando nos entregaron el premio! CAVIDA es una comunidad que lucha mucho por la paz y por eso ganamos este premio. Lo dedicamos a todas las personas solidarias que han pasado por CAVIDA, que son parte del proceso. PBI, JyP y CAVIDA son como un matrimonio, que puede tener dificultades, pero de todas formas somos y seguimos siendo una pareja.



La futura generación de CAVIDA en uno de los asentamientos  
© Jorge Mata/Surimages

### ¿Y el momento más difícil?

El idioma, no hablo alemán. Viajamos mucho, haciendo charlas y había partes cuando no entendía lo que pasaba, pero quería aprovechar para mostrar lo que está viviendo Colombia. Uribe habla de que nuestro país es un paraíso, que no es. Llevamos una pancarta con las 86 víctimas muertas o desaparecidas de la comunidad.



Anita, de CAVIDA

Uno se siente más seguro de expresarse fuera del país. Las primeras personas que dieron testimonios en Colombia sobre lo que nos hicieron ya no pueden vivir aquí. Aquí cuando hablan sienten miedo, aunque no van a mostrarlo.

### ¿Cómo ves la entrega del premio 10 años después del desplazamiento?

Es la primera vez que CAVIDA recibe un premio así. El premio es importante económicamente y vamos a invertirlo para que vaya al beneficio de toda la comunidad.

### ¿Qué significa el premio para la justicia y la reparación?

Por reclamar nuestros derechos nos asignaron el premio. Es importante porque aunque el Gobierno colombiano no les reconoce, otros sí les reconocen. Es un apoyo moral, una vitamina. Desde hace diez años exponemos los nexos y ahora hasta los mismos órganos estatales se dan cuenta de la verdad.

### ¿Cuáles son tus deseos para 2007?

Que nos devuelvan las tierras que nos han quitado, que nos dejan vivir. Es mucha la sangre que se ha derramado. Esperamos que nunca JyP y PBI nos dejen solos.

## Premio de Solidaridad de Bremen

2004 Elsa de Oesterheld (Argentina) representante de la Comisión de Madres y Familiares de los desaparecidos alemanes y Kuno Hauck (Alemania) vocero de la Coalición contra la Impunidad en Argentina.  
2003 Sumaya Farhat-Naser (Palestina) y Gila Svirsky (Israel).  
2001 Marguerite Barankitse y Melanie Ntahongendera, Ruanda.  
1997 Nadjet Bouda (Algeria), Hetti Arachchi Indra Samanmalie (Sri Lanka) y Brigitte Erler (Alemania).

1995 Han Dong-Fang, China.  
1994 Aung San Suu Kyi, Myanmar, Burma, Birma.  
1992 Davi Copenawa, líder indígena Yanomami, Brasil.  
1990 Obispo luterano Medardo E. Gómez y Tomasa de Jesús Ruiz, CRIPDES, El Salvador.  
1988 Winnie y Nelson Mandela, Sudáfrica

## Impunidad

### Operación Génesis: Diez años después

La selva entre Colombia y Panamá representa el territorio ancestral de pueblos indígenas y afrocolombianos, quienes establecieron sus comunidades en esta región mucho antes que las primeras señales de progreso llegaran a la zona. A finales de 1996 se inició una operación militar de la fuerza pública para recuperar la región del dominio de las FARC-EP. La Operación “Génesis” se desarrolló en febrero de 1997 en el Bajo y Medio Atrato y supuso bombardeos indiscriminados<sup>1</sup> sobre varios asentamientos de las cuencas del Salaquí, Cacarica y Truandó. Paralelamente, en la misma zona, ocurrieron desapariciones y masacres por parte de los paramilitares. Estos ataques ocasionaron el desplazamiento masivo de la población civil de la zona, llevando cerca de 5.000 personas a huir hacia Turbo, Apartadó, Quibdó, Medellín, la Costa Atlántica y Pacífica e incluso Panamá. El Banco de Datos de Violencia Política documenta varios de los ataques en la región, mostrando una colaboración entre la fuerza pública y paramilitares. Algunos de estos crímenes son tan bárbaros como el caso del campesino Marino López Mena, cuya cabeza fue cortada y utilizada como balón de fútbol por los militares y paramilitares que llevaron a cabo la ejecución<sup>2</sup>.

Dada la inseguridad de los pobladores de la región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 1997 solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de los desplazados por la violencia a la localidad de Turbo, entre ellos varias personas que se habían refugiado en el Coliseo Deportivo de Turbo. Justo algunos días antes de la decisión de la CIDH, dos individuos armados e identificados como paramilitares entraron en el Coliseo Deportivo de Turbo buscando a uno de los desplazados<sup>3</sup>. En esta época, voluntarios de PBI acompañaban a los miembros de la comunidad durante su estancia en el coliseo.

Mil quinientos desplazados de la cuenca de Cacarica se asociaron a CAVIDA (Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad). En los tres años siguientes, negociaron con el Estado las condiciones del regreso, y finalmente en 2001, los pobladores retornaron a la cuenca de Cacarica para establecerse en dos asentamientos. Al volver, vieron que el bosque húmedo había sido despojado de sus árboles centenarios, siendo sustituidos por grandes proyectos económicos. Dentro de este contexto y frente a la presencia de diferentes grupos armados en la zona, los miembros de CAVIDA decidieron establecerse como zonas humanitarias basándose en el derecho humanitario internacional que exige la distinción de la población civil de los objetivos militares<sup>4</sup>.

Diez años después de la Operación Génesis, varias comunidades han retornado de forma organizada a sus tierras, como en Jiguamiandó, Curbaradó y Cacarica. Las comunidades, con el apoyo de las organizaciones que las acompañan, como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), están exigiendo el reconocimiento de las responsabilidades, el cese de los hostigamientos hacia sus iniciativas de retorno, y que se solucione el tema de la reparación y de la devolución de tierras. Solicitan también el respeto de su derecho al territorio, a través del cese de siembra de palma en sus propiedades. Sin embargo, los crímenes perpetrados por varios grupos armados, como los hostigamientos, las amenazas, y las desapariciones de personas pertenecien-



Monumento en memoria de los muertos de CAVIDA

Foto: Sebastian Roetters

tes a las comunidades, siguen por el Bajo y Medio Atrato. La desaparición y asesinato de Orlando Valencia<sup>5</sup>, líder de la cuenca de Curbaradó y Jiguamiandó, ocurrida el 15 de octubre 2005, es uno de los casos más recientes y simbólicos de las violaciones sufridas por los pobladores de esta región.

A la vez, la repoblación y la implementación de proyectos productivos dentro del territorio colectivo, y según la Defensoría regional de Urabá, el fuerte poder económico y político que siguen ejerciendo las estructuras paramilitares, son una muestra de la impunidad<sup>6</sup>. A pesar de las repetidas denuncias, ningún responsable de la Operación Génesis ha sido condenado.

Para no olvidar la violencia ocurrida hace diez años y denunciar las continuas violaciones contra las comunidades afrocolombianas e indígenas del Bajo Atrato que siguen ocurriendo, el 15 de febrero CAVIDA y la CIJP organizó una caminata en Cacarica para recordar el camino que tomaron algunos de los pobladores para desplazarse.

PBI estuvo presente en la caminata, mano a mano de los miembros de CIJP y CAVIDA.



Monumento en memoria de los muertos de CAVIDA  
Foto: Sebastian Roetters

<sup>1</sup> “Sin Olvido 71. 20 Asesinados y 11 Desaparecidos forzosamente en Jiguamiandó y Curbaradó (Bajo Atrato choacoano entre el 5 y el 31 de Diciembre de 1997)”, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 30 de diciembre de 2006.

<sup>2</sup> Deuda con la Humanidad – Paramilitarismo de Estado 1988-2003, Banco de Datos de Violencia Política

<sup>3</sup> Medidas Cautelares acordadas o extendidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1997

<sup>4</sup> El derecho internacional humanitario y la protección de las víctimas de la guerra, www.cicr.org

<sup>5</sup> Sin Olvido 66 “Orlando Valencia”, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 15 de octubre de 2006

<sup>6</sup> “Urabá seguirá bajo control armado, dice el Defensor”, El Colombia, 14 de noviembre de 2006



## Violaciones de DDHH por intereses económicos

# TPP juzga a las transnacionales mineras

La sesión minería del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre empresas transnacionales y derechos de los pueblos en Colombia tuvo lugar el 10 y 11 de noviembre. El TPP representa una justicia alternativa en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación integral para las víctimas que juzga los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos contra el pueblo colombiano por los grupos económicos nacionales y por las Empresas Transnacionales que operan en el país. Los jueces del TPP se basan en las convenciones internacionales, por fuera de las estructuras judiciales de los países y representan de alguna manera la conciencia ética de los pueblos.

Durante la audiencia fueron presentados cuidadosos análisis de contexto y numerosas acusaciones que comprometen a las empresas transnacionales Drummond, CEMEX, Ladrillera Santafe, Holcim, Muriel, Glencore-Xstrata, Anglo American, BHP Billinton, Anglo Gold dedicadas a extracción de minerales en Colombia. Estos casos fueron llevados ante el TPP por organizaciones sociales y populares preocupadas por el papel activo que han tenido las empresas transnacionales en el conflicto social político y militar de Colombia, y por protagonizar un modelo económico que ha dejado serios retrocesos en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los colombianos.

Las organizaciones convocantes presentaron casos de empresas vinculadas con grupos paramilitares para favorecer sus intereses. Reportaron la utilización de actos sistemáticos y generalizados como masacre, ejecución extrajudicial, desaparición forzada,



Minero de la frontino Gold Mines  
© Jorge Mata-Sarimages



Jueces del TPP en Medellín. Foto: Gearóid Ó Loingsigh

detención arbitraria, desplazamiento forzado como estrategias de terror con el fin de descomponer el tejido social y garantizar a las empresas mineras el control sobre territorios estratégicos. Asimismo, las organizaciones denunciaron a varias empresas por su responsabilidad en la persecución y el asesinato de miembros del Sindicato de Trabajadores SINTRAMINERCOL. El Tribunal también recibió acusaciones contra el Gobierno colombiano por la violación del derecho a la autodeterminación de las comunidades indígenas y afrodescendientes por no cumplir con su obligación de consultar antes de expedir contratos para la exploración y explotación de los recursos naturales presentes en sus territorios. El derecho a la autodeterminación territorial y a la consulta previa es protegido por la Convención 169, convenio sobre pueblos indígenas y tribales, aprobado por la Organización del Trabajo en junio de 1989 y ratificado por el Estado colombiano el 7 de agosto de 1991. El artículo 7 de la Constitución colombiana también "reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana".

El tema minería es el segundo de siete temas que serán sometidos a juicio del TPP entre octubre de 2005 y julio de 2008. El Tribunal tuvo una nueva sesión en Cacarica entre el 24 y 27 de febrero para tratar el tema biodiversidad.

## Impunidad



¿Dónde están Ángel y Claudia? Ésta es la pregunta que los miembros de Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos (Asfaddes) y sus seres queridos se hacen cada día. Estos dos miembros activos de esta ONG desaparecieron hace seis años, en pleno centro de Medellín. Las investigaciones indicaron que 1.808 líneas telefónicas de organizaciones no gubernamental y de funcionarios, incluyendo las de Ángel Quintero y Claudia Monsalve, habían sido interceptadas ilegalmente a mando del teniente coronel Mauricio Santoyo.

Pese a la operación ilegal, él fue ascendido a jefe de seguridad de la presidencia tras la elección de Álvaro Uribe en 2002. Y aunque en 2004 la Procuraduría decretó el falló de su destitución e inhabilitación por cinco años, el pasado diciembre el Ministerio de Defensa ordenó su reintegro a la fuerza armada y pronto Santoyo empezará el curso de general. "A Santoyo le dejaron en libertad y le subieron el cargo. Eso es un total irrespeto a las víctimas", comentó Rosa Serna, coordinadora de la seccional Medellín de Asfaddes. Mientras el antiguo jefe del Gaula asciende en la carrera militar, las autoridades colombianas no han esclarecido la desaparición de Ángel y Claudia, y sus casos siguen en la impunidad. Sus cuerpos pueden haber desaparecido, pero sus historias no pueden ser olvidadas.



## "Un total irrespeto a las víctimas"

## Se desvela en Colombia la 'para' política

En noviembre, la Corte Suprema de Justicia lanzó ordenes de captura contra tres congresistas y empezó una investigación en contra de otro grupo de seis congresistas por supuestos nexos con el jefe paramilitar 'Jorge 40'. La información viene de su ordenador, de varias grabaciones y del testimonio del ex paramilitar Jairo Castillo. Las pruebas parecen tan contundentes que la revista *Semana* tituló un artículo "las pruebas hablan por sí solas"<sup>1</sup>. Esta situación llevó al Procurador y al Fiscal General a declarar que el país está frente a un nuevo proceso 8.000, en referencia al escándalo en el que el ex presidente Ernesto Samper Pizano y un grupo de congresistas se vieron involucrados en el caso de la penetración de dinero de la mafia en las campañas políticas. El senador Álvaro Araújo —vinculado al escándalo— afirmó que si la Corte Suprema lo afectaba con alguna decisión quedarían salpicados su hermana, la canciller Consuelo Araújo, el ex esposo de su tía, el procurador Edgardo Maya, su primo Jaime Araújo, magistrado de la Corte Constitucional y, en últimas, su propio jefe: el presidente Álvaro Uribe.

Paralelamente a los procesos judiciales, el Polo Democrático Alternativo lanzó el debate en el senado sobre estos nexos, denunciando la influencia de los paramilitares en la Fiscalía. Además en el ordenador de 'Jorge 40' aparece información sobre la relación entre la Fuerza Pública y los paramilitares en la Costa Atlántica. La procuraduría abrió pliego de cargos al ex director del Departamento Administrativo de Seguridad, Jorge Noguera, por auxiliar y entregar información a grupos paramilitares. Dentro de sus funciones, el DAS actúa como cuerpo civil de inteligencia, cuerpo de policía judicial en coordinación con la Fiscalía General y protege el Presidente. Otro comprometido es el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, acusado por la sala disciplinaria de este organismo de tener nexos con un miembro de la mafia italiana.

Aunque el escándalo está enfocado en la Costa, otras investigaciones nacen en



Manifestación durante la audiencia de Mancuso

otras partes del país, como en el Casanare por vínculos entre políticos y el paramilitar Buitrago 'Martín Llanos'. Asimismo, fue revelado un documento firmado en el 2001 por cuatro jefes paramilitares y un grupo de cuatro senadores, siete representantes y otros personajes, en total treinta y dos políticos de la Costa, en el cual se comprometieron a defender la tesis política de las AUC para "refundar nuestra patria"<sup>2</sup>.

### Las declaraciones de los 'paras'

Los jefes paramilitares Jorge 40, Salvatore Mancuso y Diego Vecino se declararon dispuestos a decir toda la verdad. Pero durante las audiencias de Mancuso la prensa consideró que "hubo poca verdad", varios de los autores de los crímenes mencionados por Mancuso están muertos, en la cárcel o prófugos de la justicia. Se dio un debate alrededor de la divulgación que deberían tener o no estas audiencias. Posteriormente, con la presión de organismos nacionales e internacionales de DDHH, la Fiscalía y la Comisión de TV accedieron a que las confesiones de los 'paras' sean transmitidas en vivo y en directo. Sin embargo, el Comité de Justicia y Paz concluyó que algunos apartes de las audiencias no deben ser públicas para proteger las investigaciones y la integridad de las víctimas<sup>3</sup>.

### ¿Nuevos grupos paramilitares?

Según *El Espectador*<sup>4</sup>, la Defensoría del Pueblo detectó la existencia de más de veinte estructuras armadas en todo el país que, con el argumento de preservar la seguridad en aquellas regiones donde se han registrado desmovilizaciones, pretenden asegurar el control de las maquinarias políticas electorales locales y regionales a través de acciones de violencia y proselitismo armado. Se trata de las denominadas Águilas Negras.

A margen de todo esto parece importante resaltar el informe entregado por la Comisión de la Verdad sobre lo ocurrido en la **toma del Palacio de Justicia** en 1985. Tres conclusiones han sido las más difundidas: el hecho que el presidente Belisario Betancourt fue un simple espectador de los hechos; que varios magistrados presentaban en su cuerpo proyectiles de armas que no usó la guerrilla, lo que muestra que la intervención militar tenía como prioridad dar de baja a los guerrilleros y no el rescate de las víctimas; que el M-19 habría recibido recursos del narcotráfico para realizar la toma.

<sup>1</sup> "Las pruebas hablan por sí solas", *Semana*, noviembre 2006.

<sup>2</sup> "Así se 'tejió' el pacto secreto del 2001 en Santa Fe de Ralito", 20 de enero de 2007.

<sup>3</sup> *El Tiempo*, 'Fiscalía 'editaría' versiones de ex 'paras' por televisión', 25 de enero de 2007.

<sup>4</sup> *El Espectador*, 'El vuelo de las 'Águilas Negras'', semana del 28 de enero al 3 de febrero de 2007.

No hay esclarecimiento sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia



## CALCP: bienvenida a una nueva organización acompañada

*Se trata de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, (CALCP), nacida en septiembre de 2001 en Bucaramanga con la intención de acompañar a organizaciones sociales, populares, organizaciones sindicales y a las comunidades de población desplazada y vulnerable en la región. Actualmente, CALCP realiza un importante trabajo de asesoría al pueblo indígena Motilón Bari en Catatumbo, que lucha para preservar y sobrevivir en su territorio ancestral.*

**¿Cuáles fueron las razones que les incentivaron a fundar la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez?**

Éramos todos recién licenciados de la universidad pública y teníamos experiencias en trabajo con comunidades, población desplazada, jóvenes, campesinos. No queríamos ejercer nuestra profesión de manera tradicional; queríamos ser abogados al servicio del pueblo, ejercer el derecho de manera alternativa y sobre todo acompañar las justas causas sociales y populares. Para la época, Bucaramanga se había convertido en zona receptora de desplazamiento forzado del Magdalena Medio, del Catatumbo, de Arauca, es decir la zona presentaba una grave crisis humanitaria, y no había en la región una organización que desde el trabajo jurídico acompañara la defensa de los derechos humanos, de organizaciones sociales y ONG.



Firma convenio CALCP

**¿Por qué decidieron solicitar acompañamiento internacional de PBI?**

Con los años, las causas que acompañamos, las zonas en donde trabajamos y nuestras posiciones en la defensa de los derechos humanos aumentaron mucho nuestro riesgo. Nosotros conocíamos el trabajo y el compromiso de PBI con otras ONG de derechos humanos, lo que nos llevó a explorar la posibilidad de solicitar este acompañamiento.

**Uds. trabajan en regiones que viven graves crisis humanitarias, enfocándose en la defensa de presos políticos, de población desplazada, de líderes sociales y populares criminalizados. ¿Cuáles son las mayores dificultades que encuentran para ejercer su labor?**

Nos movemos por zonas con gran control paramilitar en lo social, económico, político y militar. Por parte del Estado, hay un desinterés y desatención en sus obligaciones, y en particular en la protección de los derechos humanos. Además, las políticas antisociales y criminales del actual Gobierno; la abierta y encubierta complicidad del Estado y sus organismos de seguridad en la violación de los derechos humanos dificultan aún más nuestro trabajo, generando señalamientos, persecuciones y un aumento generalizado de la opresión hacia nosotros.

**CALCP asesora y acompaña el proceso de resistencia y defensa del territorio indígena del Pueblo Motilón Bari en Catatumbo, que se opone a la presencia de petroleras en sus territorios. ¿Cómo define Ud. el panorama actual de este proceso y cuáles son los mayores retos en 2007?**

Ha sido abierta, evidente y probada la violación de los derechos del Pueblo Bari, así como las amenazas a su supervivencia, integridad étnica y cultura. Sin embargo, el Estado, a través de sus organismos competentes, no ha atendido a las quejas, reclamos y solicitudes del Pueblo Indígena. Para protegerse, los Bari implementaron acciones jurídicas, de fortalecimiento organizativo, capacitación y formación, acciones de incidencia política, de visibilización y denuncia que terminaron por suspender las exploraciones de petróleo y de sísmica. Sin embargo, creemos que esa interrupción obedece más al interés de iniciar las fumigaciones en esta zona tan estratégica, de forma a garantizar un despla-



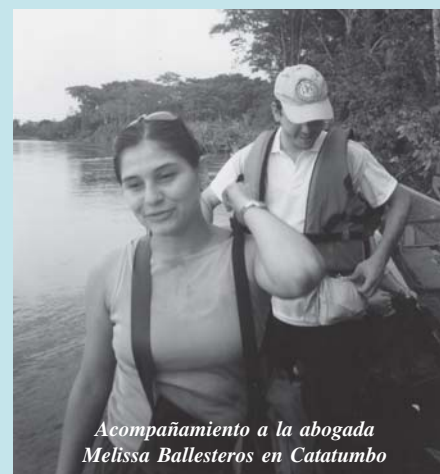
Niños y niñas del pueblo indígena Motilón Bari

zamiento y despojo de tierras, para, posteriormente, volver a iniciar las exploraciones y explotaciones.

**¿Cómo evalúan la respuesta del Gobierno a la situación de desplazamiento y violencia vivida en el nororiente del país?**

No ha habido ningún tipo de respuesta y lo poco que se ha hecho en la atención es la aplicación de recursos recibidos de la cooperación internacional. La situación de abandono es evidente incluso para la Corte Constitucional que ha dicho: Primero, el Estado no conoce las dimensiones del problema, segundo, no dispone los recursos suficientes para enfrentar el problema, y por último, no coordina con las instituciones y los entes territoriales la atención, y no dan participación a la población.

Ésta es una región donde los paramilitares siguen actuando abiertamente, utilizando el nombre de Águilas Negras. El Estado tiene interés de explotar los recursos naturales y instalar megaproyectos en esa región, y no de proteger los derechos humanos.



Acompañamiento a la abogada Melissa Ballesteros en Catatumbo

## Barrancabermeja

### Motilón Barí, reivindica sus tierras

**M**iembros del sub-equipo Barrancabermeja acompañaron a representantes del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CALCP) en su visita al grupo indígena Motilón Barí en una marcha y audiencia pública en Tibú, Norte de Santander. El evento, realizado el 12 de octubre, fue organizado por los Motilón Barí a fin de denunciar graves violaciones de derechos humanos, como la restricción de la libre circulación de las personas, la realización de actividades culturales y de subsistencia, y los ataques indiscriminados donde se han presentado bombardeos y agresiones directas contra los miembros de la comunidad Barí.

Se suman a estas violaciones la concesión del Ministerio del Medio Ambiente en mayo de 2005 de la Licencia Ambiental no. 0024 a ECOPEPETROL para establecerse en el territorio ancestral del Pueblo Barí, sin que se hubiera realizado una consulta previa a esta comunidad, y



*Audiencia Motilón Barí*

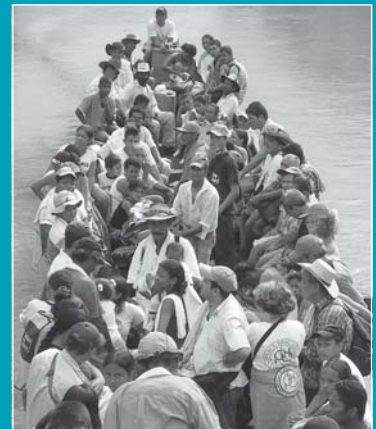
tras la presentación de graves fallas en el estudio de impacto ambiental realizado por la empresa petrolera.

La marcha y audiencia reunieron aproximadamente 800 indígenas de todas las comunidades del Catatumbo colombiano, acompañados por Naciones Unidas, organizaciones internacionales no gubernamentales, autoridades civiles y militares colombianas, representantes de la Iglesia y organizaciones sociales locales y regionales. Más de 70 indígenas Barí vinieron de Venezuela para marchar en solidaridad. Las participaciones de los representantes del Gobierno colombiano, de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, del Grupo de Licencias, Permisos y Trámites del Ministerio de Ambiente fueron canceladas en el último minuto a pesar del recibimiento de la invitación con más de 2 meses de antelación y la confirmación de sus asistencias al evento.



### Diciembre 2006: “Encuentro Agrario de la Región del Magdalena Medio”

Evento de evaluación anual del espacio “Mesa Vida Digna” promovida por la ACVC, Nuevo Puerto Ité, Valle del Río Cimitarra, Nordeste Antioqueño

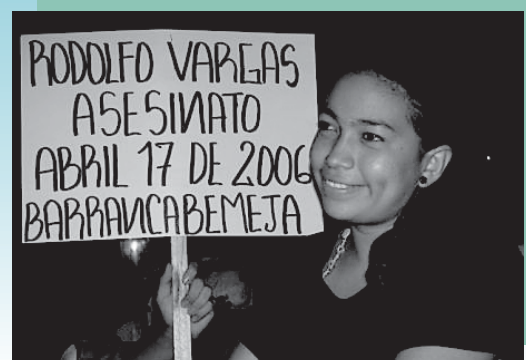


*Acompañamiento a Credhos, Valle río Cimitarra*

**E**n ocasión de la celebración de su encuentro de cierre del año la Asociación Campesina del Valle Río Cimitarra (ACVC) en Nuevo Puerto Ité, Valle del Río Cimitarra, Nordeste Antioqueño asistió, entre otros, la Corporación de Defensa de Derechos Humanos (CREDHOS), organización de derechos humanos acompañada por PBI Barrancabermeja. Los tres temas de enfoque de este evento fueron las crisis humanitarias, las fumigaciones y el cultivo de coca y violaciones de DDHH y del DIH.

### OFFP celebra el Día internacional de la NO violencia contra la mujer

La Organización Femenina Popular (OFFP) fue acompañada por miembros del equipo de PBI Barrancabermeja durante el evento de “Vigilia por la Paz”, realizado en el Parque Camilo Torres, de Barrancabermeja el 18 de noviembre, día internacional de la violencia contra la mujer. A lo largo de una de las avenidas centrales de la ciudad fueron puestas 500 sillas, ocupadas por el mismo número de mujeres llevando farolas hechas en casa, batas negras y pancartas mencionando el motivo y la fecha de muerte de uno de sus familiares. Todos los discursos llevados en el curso de este evento destacaron el lema de “No a la muerte y sí a la vida”.





## Bogotá

### Investigación del paramilitarismo en Sucre

**M**iembros del sub-equipo Bogotá asistieron a la Audiencia Pública de Derechos Humanos en San Onofre, departamento de Sucre. En este evento, realizado el 27 de noviembre, se acompañó a miembros de la Fundación Manuel Cepeda Vargas, Minga, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar), la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Asfaddes) y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP). Esta audiencia, convocada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en conjunto con el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MdV), representó un paso importante en la investigación del paramilitarismo en Sucre. En el evento estaban presentes representantes de la Fuerza Pública (tanto el Ejército Nacional como la Policía Nacional y Departamental), Jorge Blanco, el alcalde de San Onofre y el arzobispo de Sincelejo, monseñor Nel Beltrán, entre otros. Asimismo, hubo representación de la comunidad internacional a través de miembros de la embajada de Canadá, de la Mapp-OEA, Oxfam y Colombia Support Network. Estos participantes, junto con más de 1.300 ciudadanos de San Onofre y sus pueblos aledaños, presenciaron los testimonios de unas 18 personas de la zona, que fueron elegidos entre las 160 denuncias recogidas en los días anteriores al evento. Los testimonios presentados mencionaron las desapariciones forzadas masivas, la existencia de fosas comunes, de corrupción administrativa, de nexos de políticos con paramilitares y de la situación de miseria que afrontan 2.162 familias por causas del desplazamiento forzado<sup>1</sup>. Según el comunicado de la comunidad de San Onofre, “un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que data de 2005, en San Onofre el 90% del control lo ejercen los paramilitares”<sup>2</sup>.

El senador Alexander López y el congresista Wilson Borja también aportaron sus intervenciones e Iván Cepeda presentó las denuncias y el informe recopilado por el MdV. En esta ponencia, Cepeda presentó una serie de acusaciones en contra del alcalde de San Onofre, mencionando que Blanco fue el candidato único a la alcaldía por presiones ejercidas por Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cardena’. Según el documento, “su primera decisión de gobierno fue destituir, de manera ilegal a todos los funcionarios de carrera administrativa del municipio, y colocar en ellos a las cuotas

políticas de los paramilitares, quienes también han controlado el concejo municipal”<sup>3</sup>. Al final de su presentación, Cepeda, en el nombre del MdV, exigió la renuncia del alcalde y solicitó la realización de una investigación comprensiva de las pruebas sometidas por el Movimiento a la Audiencia Pública.



Víctimas de la violencia en Sucre

<sup>1</sup> “Renuncie señor alcalde de San Onofre: Siga las indicaciones del presidente Uribe Vélez”, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (29 de noviembre de 2006)

<sup>2</sup> “San Onofre: maquinaria paramilitar, terror, impunidad y corrupción”, comunicado de la comunidad de San Onofre reproducido por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (27 de noviembre de 2006)

<sup>3</sup> Ibid

## Derechos humanos para los campesinos de Casanare

**E**n noviembre, PBI Bogotá acompañó a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) en un viaje a Yopal, capital departamental de Casanare, y a la vereda Cunamá, cerca de Boyacá. El viaje tuvo varios objetivos: acompañar al abogado de la FCSPP para que pudiera hacer sus gestiones jurídicas en el juzgado 45, que se encuentra al interior de la XVI Brigada; en la Fiscalía; en la cárcel de Yopal; y en reuniones con varios familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos (DDHH). PBI, por su parte, realizó una reunión con el segundo mando y jefe del Estado mayor de la XVI Brigada. Además se acompañó a FCSPP a la vereda de Cunamá, donde el abogado dictó un taller sobre DDHH a los campesinos de la zona. El jurista informó a los lugareños sobre los organismos de control del Estado colombiano a los cuales pueden acudir en caso de una infracción a sus DDHH, sobre los mecanismos y derechos de una persona que sufre una violación, y sobre los derechos que tienen en caso de una detención. FCSPP también recogió denuncias y brindó asesoría jurídica a habitantes de la zona, los cuales denunciaron haber experimentado –en persona o en la familia– detenciones arbitrarias, asesinatos, desapariciones o amenazas cometidas por integrantes del Ejército, los paramilitares o la guerrilla. FCSPP está trabajando en la zona fronteriza Boyacá - Casanare junto con la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) y la Corporación Social Para la Asesoría y la Capacitación Comunitaria (COS-PACC). Es una zona donde históricamente se han movido los diferentes actores armados, y donde en este momento la Fuerza Pública tiene mucha presencia. FCSPP, Asfaddes y COS-PACC planifican una misión de acompañamiento a la provincia de La Libertad, Boyacá en febrero 2007 para verificar la situación humanitaria y de DDHH.

## Medellín

### Víctimas quieren escuchar confesiones de Mancuso

**S**alvatore Mancuso inició sus declaraciones en versión libre el pasado 19 de diciembre en la ciudad de Medellín. Mancuso, ex jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), respondió por sus actuaciones como jefe paramilitar durante más de diez años ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz. Afuera del Palacio de Justicia en Medellín, organizaciones solicitaron que la versión de Mancuso fuera pública. Una de las organizaciones que se encontraba afuera del edificio era el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MdV), incluyendo un miembro de la Fundación Manuel Cepeda, acompañado por PBI, junto con la Corporación Jurídica Libertad y otras ONG locales. La Fiscalía decidió impedirles el ingreso, argumentando que no se trataba de una audiencia, sino una versión libre que hace parte de la investigación y por lo tanto no tiene carácter público. El MdV sacó un comunicado público el mismo día, donde destacó que “una vez más se hace evidente que a las víctimas y la sociedad en su conjunto se les niega hasta la posibilidad de escuchar la “versión” de los victimarios, en una audiencia que obliga ser totalmente pública, abierta y de cara al país.” Los desmovilizados de las AUC y sus familiares también hicieron una manifestación este día, llevando pancartas para respaldar a Mancuso.

## Medellín

### Fortalecimiento campesino en el Oriente Antioqueño

Desde Abril de 2001, PBI Medellín acompaña regularmente a la Corporación Jurídica Libertad (CJL) en sus viajes al Oriente Antioqueño (OA). En esta sub-región de Antioquia, al este de Medellín, la población civil ha sufrido y sufre violaciones severas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH): amenazas, detención arbitraria, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado con responsabilidad de los grupos armados ilegales y la fuerza pública colombiana, según CJL. Esta ONG acompaña a las víctimas ofreciendo asesoría jurídica y defensa jurídica defendiendo casos de violaciones de derechos humanos en espacios jurídicos colombianos e internacionales. CJL también proporciona talleres de derechos humanos y salud en las zonas rurales del OA, fortaleciendo la capacidad organizativa de las comunidades afectadas por el conflicto armado en Colombia.

El 27 y 28 de noviembre dos miembros del equipo de Medellín acompañaron a un

miembro de CJL en las veredas El Molino y El Jordán, municipio de Cocorná, para la presentación de un taller de salud sexual para los jóvenes de la zona. En la primera localidad, soldados utilizaban las instalaciones de la escuela de la vereda. Tanto el Comité Internacional de la Cruz Roja como Naciones Unidas (NNUU) han mencionado que la presencia de tropas en el

seno de una escuela va en contra del principio de distinción entre combatientes y población civil y transforma un bien civil en objetivo militar. Año tras año Naciones Unidas relata en sus informes diversos incumplimientos de la fuerza pública a este principio del derecho internacional humanitario, como muestra los ataques con explosivos por la guerrilla después de la instalación de un campamento de tropas del Ejército en inmediaciones de la escuela Pedro Nel Jiménez de Panamá de Arauca en 2005<sup>1</sup>.



Acompañamiento a El Molino, Cocorná

<sup>1</sup> Informe Oacnudh 2005

## Urabá

### Un día en la zona humanitaria El Tesoro

*Los voluntarios del sub-equipo Urabá Moritz Tenthoff, de Holanda y Laia Bertrán, de España, acompañaron a la Hermana Cecilia de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y al Padre Javier Giraldo a una remota zona del Chocó para celebrar las Navidades con las comunidades. Éste es su relato:*

Con la construcción de la Zona Humanitaria en la finca de don Petro en abril de 2006, varias otras comunidades también han empezado a organizar el retorno a sus fincas y comunidades en la cuenca de Curbaradó. En octubre de 2006 volvieron 35 familias a El Tesoro. Los habitantes vienen de la cuenca de Jiguamiandó, donde, tras su desplazamiento, vivieron en la zona humanitaria de Bella Flor Remacho.

El camino geográfico de la finca de don Petro hasta El Tesoro es como repasar los últimos diez años que han vivido las comunidades afrocolombianas e indígenas en estos territorios. Salimos en medio de la

palma, mientras que a lo lejos, por la altura del Cerro Carreperro, escuchamos unas fuertes explosiones. Vemos helicópteros de las Fuerzas Armadas sobrevolando en el horizonte. En medio de la palma, pasamos el antiguo caserío de Andalucía, que fue abandonado hace casi diez años y donde solo se ha quedado la escuela en medio del desierto verde. Diez minutos después salimos de las plantaciones de palma y cruzamos una finca abandonada. En las paredes de la casa se han quedado las pintadas de las ACCU (Autodefensa Campesinas de Córdoba y Urabá) y del BEC (Bloque Élder Cárdenas).

El sol nos pega fuerte y el sudor está corriendo por nuestras espaldas. Es un alivio cuando por fin entramos en la espesa selva. Pasamos caseríos abandonados con algunas de sus casas todavía en buen estado. Los combates entre paramilitares, ejército y la guerrilla han desplazado a los habitantes desde el 1997. Tras una década de masacres, bloqueos econó-

micos y hostigamientos casi no queda gente por estas tierras. Los que volvieron, encontraron más de 40.000 hectáreas de palma aceitera en el territorio colectivo.

Después de dos horas en la selva vemos por fin una señal de vida. Se nos acerca un perrito y luego a lo lejos escuchamos las voces de unos niños. Están pescando a las orillas del caño, que nos ha estado acompañando durante todo el camino. Media hora después cruzamos unos cultivos de pancoger para luego ver a unos doscientos metros la entrada a la zona humanitaria. Un pueblo entero, de apenas dos meses, en medio de la selva. Hay mucha actividad, humo que sale de las casas, pollitos, marranos, muchos niños mirándonos, sonriéndonos, todo el mundo trabajando en algo, pilando arroz, cortando madera, preparando el almuerzo. Nos abrazan, nos saludan y nos cuentan que han nacido dos niños desde que se han instalado acá. Después de diez años de violencia y desplazamiento, los campesinos han vuelto a lo que es suyo. “Mi finca queda aquí al lado, pero prefiero vivir todavía con los de la zona humanitaria. Hemos pasado por todo eso juntos. Nos necesitamos todavía”, cuenta Roberto, una de las joyas de El Tesoro.



Brigadistas entrando en la zona humanitaria El Tesoro



## 25 aniversario de PBI en España

Santander, al norte del Estado Español, fue el escenario de las jornadas de celebración del 25 aniversario de PBI, con la colaboración del Aula de Cooperación Internacional y la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria. Durante el evento, se realizó el seminario sobre protección a defensores titulado “Procesos de resistencia y acompañamiento internacional” durante el cual Liam Mahony y Luis Enrique Eguren presentaron su nuevo libro, “En buena compañía: acompañamiento internacional para la protección de los Derechos Humanos”. La jornada contó con la participación de **Rainer Huhle**, miembro del Centro de derechos Humanos de Nuremberg (NMRZ), quien trabajó como experto en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), **Martha Ascuntar**, coordinadora en el Valle del Cauca de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), **Roly Escobar Ochoa**, Coordinador General de la Coordinadora Nacional de Pobladores y Áreas Marginales de Guatemala (CONAPAMG), **Obtilia Eugenio Manuel**, Secretaria Ejecutiva de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaa (OPIM) de México, entre otros.



José Félix Gª Calleja (Director de Cooperación del Gobierno de Cantabria), Eduardo Casas (Vicerrector de la Universidad de Cantabria), Luis Enrique Eguren (coautor del libro) y Susana Fernández (PBI).

## Misiones de la UE llamadas a consultar con la comunidad de DDHH

La Oficina Europea de PBI en el 8º Foro de Derechos Humanos de la Unión Europea

**B**ruselas.- Las mujeres defensoras de DDHH fueron uno de los focos de interés en el 8º Foro de DDHH de la Unión Europea (UE) organizado por la presidencia finlandesa en Helsinki los días 7 y 8 de diciembre del 2006. Por tercera vez consecutiva, la Oficina Europea de PBI (PBI-BEO) fue invitada a participar en este foro de DDHH organizado anualmente por la presidencia europea.

En esta ocasión el foro se dividió en tres grupos de trabajo, uno sobre defensores de DDHH, un grupo que trabajó en los DDHH y la lucha antiterrorista, y otro que estudió las cuestiones relativas a la promoción de los DDHH y la democracia. Los representantes de PBI participaron activamente en el grupo sobre defensores de DDHH donde había también representantes de la presidencia finlandesa, parlamentarios, miembros de organizaciones internacionales y defensoras

de DDHH de varios países, como por ejemplo Kopila Adhikari acompañada por PBI en Nepal.

Algunas de las conclusiones más destacadas del primer grupo hacen referencia a la implementación de las directrices de la UE sobre defensores. Concretamente, el grupo de trabajo consideró importante que las misiones diplomáticas de la UE en el terreno organicen reuniones de consulta con la comunidad local de DDHH para acordar estrategias hacia la implementación efectiva de las directrices, con un enfoque especial en el tema de género. PBI considera que en este sentido, las 64 recomendaciones surgidas de la evaluación llevada a cabo por la presidencia austriaca en junio del 2006, constituyen un excelente punto de partida para estas consultas. Para más información sobre las conclusiones, vea <http://www.protectionline.org/spip.php?article1717>.

## De San José de Apartadó a Holanda

**W**ilson David Higueta, representante de San José de Apartadó, revivió las historias de la comunidad de paz al narrar para unas 40 personas en Ámsterdam, Holanda, como los desplazamientos causados por los combates entre la guerrilla, paramilitares y el Ejército, junto con las constantes violaciones de derechos humanos han llevado sus pobladores a crear la comunidad de paz. Asimismo, Wilson rememoró la muerte del líder Luis Eduardo Guerra y sus seres queridos, la más reciente pérdida sufrida por San José y recordó que hasta ahora este caso sigue en la impunidad. Durante su gira por Holanda, Wilson fue entrevistado por la radio Wereldomroep, se encontró con Amnistía Internacional Holanda y tuvo una reunión con Janine de Vries, asesora del parlamentario Bert Koenders.



Wilson David

## PBI INTERNACIONAL

● Rasmus Gerlach, realizador independiente, acompañó durante un año a brigadistas en Colombia y México, donde visitó zonas de conflicto junto con abogados, observó marchas, visitó presos políticos en cárceles y la casa de defensores amenazados. Su documental “La Brigada de Paz – con escoltas sin armas en Colombia y México” (Ale/Col/Mex 2006, 81 min). refleja la vida y el trabajo diario de los brigadistas en el terreno y explica con ejemplos instructivos, cómo funciona una activación de emergencia de las Redes de Apoyo y cómo trabajan los activistas en los Grupos Nacionales. Se puede comprar el documental a través de PBI Alemania, [info@pbi-deutschland.de](mailto:info@pbi-deutschland.de).



● PBI comienza una fase exploratoria de transversalización de género y diversidad en todos los proyectos de PBI, tanto en lo que se refiere a su funcionamiento interno como en lo que se refiere a su trabajo en el terreno y sus relaciones con las contrapartes locales.

## BUREAU EUROPÉEN EUROPEAN OFFICE (BEO)

● En diciembre PBI-BEO y PBI Estado Español se reunieron con una diputada del Partido Popular para presentar proyecto de resolución parlamentaria sobre defensores de derechos humanos.

● El nuevo documental “República Democrática del Congo: Las Armas de la impunidad (République démocratique du Congo: les armes de l’impunité)” fue presentado en Bruselas y París. El video muestra como defensores de derechos humanos y periodistas en RD Congo, poniendo su propia vida en riesgo, documentan violaciones de derechos humanos en un conflicto con 3.8 millones de desplazados. Su objetivo es luchar por la verdad, justicia y reparación y contra la impunidad. Por eso son amenazados y asesinados como Pascal Kabungulu Kibembi, quien trabajaba con la Ligue des Droits de l’Homme dans la Région des Grands Lacs (Liga de los Derechos Humanos en la Región de los Grandes Lagos), asesinado el 31 de julio 2005. (ver video online en: <http://www.protectionline.org/spip.php?article1349>)

## Comunidad de paz de San José de Apartadó se expresa en Washington

**R**enato Areiza, líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, viajó a Washington, como parte de su gira por Estados Unidos el pasado noviembre. Su hermana Deyanira Areiza fue una de las 8 personas de la comunidad asesinadas en la masacre de febrero 2005, crimen que hasta la fecha aun sigue en la impunidad.

Con el objetivo de promover la seguridad de la comunidad, la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos otorgó a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó “medidas provisionales”, las cuales instan a las autoridades colombianas a garantizar la seguridad a miembros de la comunidad a través de una serie de acciones.

Sin embargo, actores armados continúan agrediendo a miembros de la comunidad, y según Amnistía Internacional más de 160 miembros han sido asesinados o desaparecidos des-

de su creación en marzo de 1997. La comunidad ha sufrido masacres, bloqueos económicos, desplazamiento forzado, e intimidación por parte de todos los actores armados de Colombia – militares, paramilitares y guerrilla.

El representante de PBI en Estados Unidos organizó una gira en Washington con el propósito de ganar apoyo político para la Comunidad y visibilizar la realidad de la precaria situación de derechos humanos en la región hoy en día. Entre el 14 y 16 de noviembre el representante, Renato y un especialista sobre Colombia de WOLA (Washington Office on Latin America) se reunieron con doce congresistas y con el asistente de un senador, quien habló en detalle con Renato y el representante sobre nuevas estrategias de trabajo político y temas de protección para la comunidad.

La gira de Renato proporcionó aspectos positivos como mayor apoyo político, ampliación de la Red de Apoyo y



Visita de Renato Areiza a Washington

además asesores de congresistas hicieron llamadas al Department of State (Departamento del Estado, DOS en su sigla en inglés) mostrando su preocupación por la falta de progreso en el caso de la masacre de febrero 2005. Durante una reunión con un oficial de programa del DOS, PBI Colombia tuvo la oportunidad de compartir sus preocupaciones por la situación de la comunidad. Como respuesta, miembros del DOS afirmaron que siguen muy pendiente de la situación de la comunidad de paz. Jonathan Farrar, vicesecretario adjunto de Estado para Asuntos Internacionales, con otros dos funcionarios, ya tiene planificada una visita a la comunidad.

## OTROS PROYECTOS PBI

◆ **GUATEMALA:** El último año del gobierno Berger, se caracteriza por una fuerte militarización del país y, en el ámbito de trabajo de PBI, por un ambiente hostil contra organizaciones acompañadas. Sigue la lucha contra la impunidad - en noviembre 2006 España emitió órdenes de captura contra el ex general y dictador Ríos Montt. También desde este país se trabaja por el fin a la impunidad: Roly Escobar, coordinador de la organización de pobladores de áreas marginales CONAPAMG, denunció el asesinato de una colega de la misma organización. Poco después recibió amenazas de muerte y seguimiento cercano. PBI activó su Red de Apoyo Internacional y sigue vigilando su situación con preocupación.

◆ **INDONESIA:** Mientras el proceso de paz en Aceh sigue avanzando y elecciones locales fueron celebradas sin incidentes de seguridad, el equipo en Wamena, Papua, reporta un aumento de tensiones después del asesinato de dos miembros del ejército nacional TNI en diciembre. En Jayapura, Papua, el equipo acompaña a Yan Christian Warinusy, director de la organización LP3BH (Instituto de Investigación, Análisis y Desarrollo para Asistencia Judicial), desde que este identificó la observación y seguimiento por parte de miembros de los servicios de inteligencia militar. El equipo, además, está evaluando nuevas peticiones para Papua y Yakarta.

◆ **NEPAL:** El Gobierno de la Alianza de Siete Partidos y los maoístas lograron firmar un tratado de paz, acordar una constitución interina y los términos de participación de los maoístas en el Gobierno. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro rol del Palacio y del Ejército Nacional mantiene el proceso en un estado frágil. La organización de abogados “Advocacy Forum”, miembro de la Comisión Internacional de Juristas (ICJ por sus siglas en inglés) trabaja contra la impunidad de violaciones de derechos humanos y ha pedido acompañamiento a PBI para poder dedicarse a documentar e investigar 12 casos de desaparición en Katmandú y en el Oriente del país.

◆ **MÉXICO:** Se confirman las preocupaciones sobre la baja prioridad que el tema de derechos humanos tendrá en la agenda del nuevo gobierno Calderón como en la época Fox. Lo que empezó como un paro de los maestros en Oaxaca en Mayo del 2006 se transformó en un movimiento social amplio de protesta contra corrupción y violaciones de derechos humanos. Mientras en el escenario internacional esos hechos provocaron numerosas reacciones de protesta, PBI México en el terreno respondió a varias peticiones de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos (RODH) y acompañó a sus coordinadores, inicialmente en sus esfuerzos de frenar las escaladas violentas por parte de las fuerzas públicas contra los protestantes, y más adelante en las misiones de observación e investigación sobre las agresiones e intimidaciones a las cuales fueron sometidos los participantes de las protestas pacíficas.



## Hora de decir adiós

Rae Anne Lafrenz, de Estados Unidos, y Bettina Priotti, de Argentina estuvieron más de dos años en el proyecto Colombia, pero jamás tuvieron la oportunidad de trabajar juntas. Rae Anne dejó su huella en los sub-equipos Medellín y Urabá, mientras Bettina compartió su inspiración con los voluntarios de Barranca y Bogotá. Antes de cerrar las maletas de recuerdos y volver a sus respectivos destinos, las dos compañeras de las Américas se entrevistaron y dejaron una muestra de su estancia en Colombia.

### Bettina pregunta a Rae Anne

*¿Cuál fue la mayor lección que aprendiste en PBI?*

Después de trabajar años en proyectos más del estilo “desarrollo” y actuando directamente con comunidades marginadas, la “no injerencia” me resultó alucinante. He visto que el **no hacer** tiene un papel aún más significativo para los acompañados de PBI por la confianza que este implica en la relación. Recorrer las ciudades o los ríos al lado de ellos, para sencillamente asegurar que su trabajo siga caminando representó una lección muy importante en el arte de escuchar y observar, con todos los sentidos activos. El **no hacer** y el **sí caminar-escuchar** es una herramienta que pienso utilizar desde aquí entonces.

*En los dos años que trabajaste como voluntaria ¿cuál fue el momento más impactante?*

Mis momentos más “impactantes” han tenido un hilo común: el miedo. No mi propio miedo, ya que no tengo temores que me dificultan el trabajo. Me refiero a las situaciones cuando el temor real de los acompañados o la gente en las comunidades me ha contagiado y terminó con que compartiera el terror del momento. La primera vez que sentí miedo por un acompañado, en una situación bastante peligrosa para él, me costó trabajo asimilarlo, pues jamás había sentido algo así. Luego me impactó igual de fuerte la rapidez con la cual pude bajar la adrenalina para poner en práctica las actuaciones de seguridad empleadas por PBI en el terreno. Y, por fin, me queda un último impacto: darme cuenta que el miedo no era mío sino prestado del otro, y pase lo que pase nunca seré una defensora de derechos humanos amenazada de muerte en Colombia. Son momentos de acompañamiento intenso.

*Has acompañado el progreso de la construcción de la zona humanitaria de Curbaradó desde su inicio. ¿Qué significó este acompañamiento para ti?*

Tuve “la dicha” de poder presenciar el establecimiento y crecimiento de una nueva zona humanitaria en la cuenca del río Curbaradó. Me creo dichosa porque poca gente en este mundo tiene la oportunidad de conocer a un retorno de desplazados a sus tierras y menos aún, ver la formación de un nuevo proceso de resistencia dedicado a la protección y organización de los campesinos. Compartir la convivencia con los campesinos y proteger los defensores que acompañan al proceso de la zona humanitaria han sido regalos inesperados para mí, algo que hasta hoy día me llena de muchas emociones fuertes. Me dará mucha ilusión volver a verlos en un año, o dos, o tres, allí en Curbaradó, viviendo la vida que tanto anhelaban desde su desplazamiento forzado. Mientras, me comprometo a hacer mi parte de difundir las historias de las víctimas y empujar desde afuera de PBI temas como la justicia y verdad. Ya no puedo quedarme muda después de haber compartido tanto con la gente de Curbaradó.



Bettina Priotti

### Rae Anne pregunta a Bettina

*Has trabajado en los sub-equipos de Barrancabermeja y en Bogotá. ¿Qué destacarías de cada región?*

Mi primer compromiso fue estar en PBI y en Colombia por un año, que con el paso del tiempo y las necesidades del proyecto se convirtieron en 15 meses en el s-e de Barrancabermeja. El trabajo en terreno te estimula a querer conocer más directamente cómo es que funciona la disuasión y de qué formas hacemos el trabajo político y eso decididamente te lleva a querer estar un tiempo en Bogotá, que es dónde mayor incidencia se puede hacer dentro de Colombia. Te diría que elegiría lo mismo en una vida próxima, aunque rogaría por un poco más de brisa en Barranca.

*Después de trabajar con las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina ¿cómo describes tu experiencia de acompañar a una ONG similar como la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos?*

Venir a Colombia siendo hermana de un secuestrado y desaparecido por el terrorismo de Estado implantado en Argentina durante finales de los 70, luego de militar en el movimiento de DDHH siendo parte de Familiares y otras organizaciones como Madres, Abuelas y en tiempos más cercanos acompañar la formación de HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), aparte de venir ya sensibilizada con la temática, traje la ilusión de poder compartir esas vivencias con otras personas. Llegué con el alma a flor de piel sabiendo que sigue habiendo víctimas de prácticas tan aberrantes como esa. Me he emocionado en Barrancabermeja con los familiares del 16 de mayo y también en actos del Movimiento de Víctimas, ASFADDES, el nacimiento de Hijos e Hijas, transitar la plaza de Bolívar llena de fotos gigantescas o pequeñas, siempre en la búsqueda de rostros y memoria. Debo confesar que me ha costado solo “acompañar”, pero lo he logrado ya que creo que la eficiencia de nuestro trabajo justamente se basa en ese estar sin opinar, ni interferir en las decisiones de las organizaciones que acompañamos. Ha sido para mí dos años y medio inolvidables y extraordinarios. Vuelvo a mi país en la convicción de que aún queda mucho por hacer en Colombia y Latinoamérica y que uno de los trabajos más importantes y que hacen la diferencia es la presencia de PBI Colombia. Entonces a trabajar desde el Sur del Sur para que esta experiencia se multiplique en la región.

*¿Qué llevarás de recuerdo de tus dos años en PBI Colombia?*

Fue muy importante reafirmarme en la convicción de que aún son posibles los proyectos colectivos y solidarios, que no todo en el mundo es “dinero, y que este aporte de PBI es pequeñito pero hace una diferencia en la forma de ayudar a la transformación del conflicto en Colombia.



Rae Anne Lafrenz





[www.peacebrigades.org/colombia](http://www.peacebrigades.org/colombia)

Para ello sólo tiene que visitar nuestra web o bien ponerse en contacto con nosotros:

Delegación PBI Internacional.-

Development House,  
56-64 Leonard St., Londres  
(Reino Unido), EC2A 4JX  
Tel. (+44) 20 7065 0775  
[admin@peacebrigades.org](mailto:admin@peacebrigades.org)

Proyecto PBI Colombia.-

11 Rue de la Linière  
1060 Bruselas (Bélgica)  
Tel. (+32) 32 2609 4400  
[info@pbicolombia.org](mailto:info@pbicolombia.org)

Delegación PBI en Colombia.-

Aptdo Aéreo 36157  
Bogotá (Colombia)  
Tel. (+57 1) 287 04 03 / 323 0706  
[info@pbicolombia.org](mailto:info@pbicolombia.org)

Peace Brigades International (PBI) es una Organización No-Gubernamental registrada ante la ONU, que mantiene en Colombia un equipo de observadores / acompañantes internacionales permanentes desde 1994 con el fin de proteger el espacio de actuación de los defensores de derechos humanos, legalmente reconocidos, que sufren represión por su trabajo no violento en pro de los derechos humanos.

Para conseguir este objetivo, el Equipo de PBI Colombia, siempre a petición local, permanece sobre el terreno acompañando a las personas u organizaciones amenazadas, distribuyendo información sobre la evolución del conflicto, realizando labores de interlocución y cabildeo con las autoridades civiles y militares, así como con organismos estatales, ONGs, Iglesia, cuerpo diplomático y otras organizaciones para promover la acción internacional.

Si considera que la presencia de PBI es útil para proteger a las personas que trabajan por los derechos humanos, usted puede:

- Apoyarnos económicamente. A título personal o a través de una entidad.
- Unirse a su grupo PBI más cercano. Ayudar a la red internacional desde su ciudad.
- Hacerse voluntario PBI. No importa su procedencia, raza, condición sexual o religiosa.

